En un indespejable gesto de ambigüedad, los universitarios volvieron a la cordura y a la sensatez masivas después de que la autonomía había sido socavada por la ocupación castrense en los edificios de la institución cultural más elevada del país. Pero ni siquiera ésta fue una reacción espontánea, sino suscitada por la valiente actitud del recto de la UNAM, ingeniero Javier Barros Sierra. Que se entienda bien: no pretendo sugerir que los universitarios esté pidiendo la represión para reconquistar la reflexión. Una sucedió a la otra en el orden del tiempo, no en el plano de la fundamentación de sus excelencias. La autonomía semeja ser una “ave fénix” que sólo renace cuando ha sido literalmente reducida a cenizas. Como hecho es incuestionable, como principio está sometido a una incalculable reserva de interrogantes.

El Presidente de la República estaba ausente de la capital cuando se produjeron las decisiones radicales de represión y de violación de la autonomía universitaria. Sus colaboradores: el regente de la ciudad de México, el Secretario de Gobernación y los dos procuradores se echaron a cuestas las responsabilidades de graves resoluciones. ¿Acertadas? Diríamos que no absolutamente, si es que tomamos en cuenta lo que vino después: la recuperación racional de las facultades de sensatez de la UNAM por obra y gracia exclusivas del rector Barros Sierra. Pero, ¿podríamos anticipar que tanto la máxima autoridad de nuestra casa de estudios cuanto la masa estudiantil irían responder con la forma admirable en que lo hicieron? En realidad lo que sucedió más parece efecto del milagro que de la consecuencia estoica derivada del respeto a los postulados más arriesgados de la noción de autonomía universitaria. De repente, el rector Barros Sierra adquirió la grandeza de lo insobornable. Su actuación hasta entonces había sido de esfuminada contención.

Por otro lado, hay que reconocerles a los colaboradores más cercanos al gobierno que acabo de citar, el haber dado la cara y sus nombres –el haber suscrito sin evasivas– una decisión política que sin justificación los exponía a la ira popular, no sólo estudiantil. En esta ocasión ejemplar no ha habido anonimato que valga. Si el general Marcelino García Barragán disputa todavía que sus hombres y no los estudiantes, son inocentes de la destrucción de una puerta venerable –la de la Preparatoria Número Uno–, esto da a entender claramente que las consciencias no están tranquilas. Pero tranquilas o no, lo cierto es que en este momento es imposible andar traficando con la autoridad presidencial para lavarse las manos.

Sentencia el dicho popular: “Más vale prevenir que tener que remediar”. La Universidad no supo prevenir, pero sí supo remediar. Las autoridades públicas andan aún tratando de remediar. Están en peores condiciones. La justicia no pacta: su obligación es decir la verdad. Los universitarios pueden explicar al pueblo de México que, después de su abstención, fueron capaces de convocar a la gran masa de sus agremiados para demostrar que encauzan sus peticiones por las vías racionales y que no deponen en ningún momento sus principios de autonomía. ¿Las fuerzas represivas han conseguido lo mismo? En manera alguna. Si el regente de la ciudad de México hubiera decretado el cese inmediato de los jefes de la policía represiva y las sanciones a los desmanes del Ejército, en este instante gozaría de una popularidad nacional más impresionante que la del rector Barros Sierra. Pero su situación es más difícil –¡y que me valga el sacrosanto principio de la libertad de expresión! –, las arrogancias del orden son a menudo más onerosas en todos sentidos, que los vandalismos del desorden. Esta vez ha costado más el orden que el desorden. Jamás había visto yo azoros del pueblo como los que he contemplado en la última semana. Las algaradas sin importancia indujeron represiones de importancia. Y de esto deben responder al Presidente los abusivos del poder.